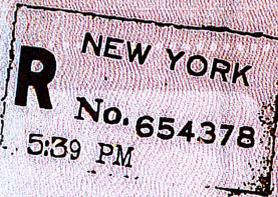


PLINIO APULEYO MENDOZA



MAY 24

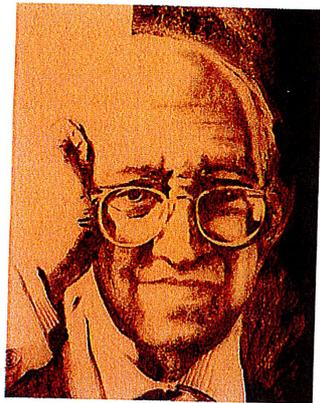
CÁRCEL O EXILIO

Mirada crítica a la sombría realidad
de la justicia en Colombia



660038370

Planeta



Plinio Apuleyo Mendoza

Nació en Tunja, Boyacá, en 1932. Escritor, periodista y diplomático. Estudió Ciencias Políticas en La Sorbona, de París. En 1979 ganó el Premio de Novela Plaza & Janés con *Años de fuga*. Es autor también de *El país de mi padre*, *El día que enterramos las armas* y *Últimas noticias del nuevo idiota iberoamericano*, este último en coautoría con Álvaro Vargas Llosa y Carlos Alberto Montaner. Es Caballero de la Orden de las Artes y Letras de Francia y ganador del Premio Simón Bolívar.



© Plinio Apuleyo Mendoza, 2016
© Editorial Planeta Colombiana S. A., 2016
Calle 73 N.º 7-60, Bogotá
Diseño de cubierta:
Departamento de diseño Grupo Planeta
Imagen de cubierta:
Shutterstock

Primera edición:
julio de 2016
ISBN 13: 978-958-42-5163-3
ISBN 10: 958-42-5163-5
Impreso por:
Colombo Andina de Impresos S. A. S.

Este libro no podrá ser reproducido, ni total ni parcialmente,
sin el previo permiso escrito del editor. Todos los derechos reservados.

Andrés Felipe Arias

Nunca esperó un fallo condenatorio. Presentados todos los descargos, Andrés Felipe Arias estaba seguro de que la decisión de la Corte Suprema de Justicia le sería favorable. Las pruebas de su defensa habían demolido la teoría del caso de la Fiscalía durante el juicio. Adicionalmente, Andrés Felipe y su abogado habían logrado evidenciar varias pruebas adulteradas y manipuladas por la propia Fiscalía. Tanto así que varios de los periodistas que habían cubierto el juicio le informaron al propio Andrés Felipe que tenían información veraz, proveniente de los propios magistrados, según la cual la labor de la Fiscalía había sido tan precaria que, por ende, tendría que ser absuelto.

Lo único que le resultaba inexplicable era el continuo aplazamiento de la audiencia final. En efecto, el veredicto lo debió emitir la Corte pocas horas o días después de terminado el juicio. Así lo dicta el Código Penal, pues de otro modo los fallos quedan expuestos a presiones externas. Y es que, terminado el juicio contra Andrés Felipe, la sensación de todos los presentes, incluidas las caras largas de los fiscales del caso, apuntaba a una inminente absolución. Uno de los magistrados auxiliares le confesó a uno de los integrantes de la Defensa que no había manera para que Andrés Felipe pudiese ser condenado. Pero el fallo fue aplazado una primera

vez cuando se acercaba la elección al Congreso. Luego fue suspendido una segunda vez cuando se acercaba la primera vuelta presidencial en la cual Óscar Iván Zuluaga resultó triunfador.

Quizá —pensaba Andrés Felipe ingenuamente— los aplazamientos se debían a que la Corte no quería emitir su absolución en medio de la polarizada contienda electoral. Pero no era así y el exministro estaba por recibir el más duro golpe de su vida cuando el país se encontraba *ad portas* de la segunda vuelta presidencial y todas las opciones parecían asegurar el triunfo de Óscar Iván Zuluaga, rotundo vencedor de la primera vuelta. En efecto, en la mañana del viernes 13 de junio de 2014, 48 horas antes de la decisiva elección presidencial, la propia Corte Suprema de Justicia filtró ilegalmente a un periodista muy cercano al fiscal general de la Nación el rumor —que se difundió por todos los medios de comunicación— de que habría contra él un fallo condenatorio.

Cuando Andrés Felipe se dio cuenta de que el propio director de la Unidad Nacional de Protección, persona encargada de salvaguardarlo a él y a su familia debido al nivel de riesgo extraordinario que enfrentan en Colombia, estaba difundiendo y amplificando la falsa noticia de la condena a través de las redes sociales, el exministro, su familia, sus abogados, sus amigos y sus compañeros de lucha política no tuvieron la menor duda de que algo muy sucio, inducido por el propio aparato estatal, había sucedido entre la culminación del juicio, cuando la absolución era inminente, y el alborotado momento electoral.

Y es que no se puede olvidar que en ese momento tanto el Gobierno como el aparato judicial habían desatado la más

feroz cacería contra el Centro Democrático y quien se perfilaba como muy posible presidente de Colombia: Óscar Iván Zuluaga.

Catalina, esposa de Andrés Felipe, no lo tomó a la ligera. Alta, bonita, delgada, con una fosforescente vivacidad, había tenido que compartir con su marido dos caras opuestas de un destino. Feliz la primera, trágica la segunda.

Feliz la primera, porque cuando se conocieron en su respectivo ámbito aparecía un prometedor futuro. El de ella tenía los destellos propios de una joven ejecutiva que se había hecho notoria en el mundo financiero. El de Andrés Felipe también, pues era visto en la vida nacional como el joven ministro de Agricultura recientemente designado por el entonces presidente Uribe, con visos tan parecidos al mandatario que la opinión lo veía como un precoz heredero suyo.

Andrés Felipe y Catalina, como alguna vez lo escribí, sintieron el uno por el otro una rápida atracción. Fue un amor a primera vista. Se casaron en una ancestral iglesia de Sopó solo nueve meses después de haberse conocido.

La inesperada y sombría cara que tomó de pronto su destino apareció con el mal llamado escándalo de Agro Ingreso Seguro difundido por los medios de comunicación y aupado por los adversarios del expresidente Uribe. Catalina había dejado a un lado su exitosa carrera para dedicarse a su familia. Eloísa, su hija, contaba dos años y el pequeño Juan Pedro apenas veinte días de nacido cuando Andrés Felipe fue detenido y llevado al tétrico búnker de la Fiscalía previsto para los más peligrosos delincuentes.

“Sé que algún día, que no sé cuándo llegará, ni la Fiscalía ni nadie podrán encontrar delito alguno en el proceder de mi esposo —escribió ella entonces—. Nadie se imagina lo

que hemos tenido que aguantar, lo que ha sido esta difícil experiencia. Pero ni siquiera a quienes nos han hecho tanto daño les deseo que vivan algo parecido”.

Como atrás queda dicho, desde cuando estalló el escándalo ella vivió a la sombra de aquel desastre. Cuando Andrés Felipe, luego de permanecer dos años recluido, quedó en libertad esperando el juicio, ella vio al fin posible su justa absolución. De ahí que al escuchar los rumores radiales de ese fatídico viernes 13 presintió que todas sus esperanzas se derrumbaban. Sin vacilación alguna, tomó el teléfono y llamó a su madre. No la hizo todavía partícipe de su angustia. Se limitó a anunciarle que irían al mediodía a su casa. Solo entonces, cuando se encontraron en el vestíbulo, la zozobra que una y otra habían ocultado se hizo visible. Se abrazaron y rompieron a llorar.

UNA INESPERADA PESADILLA

Los suegros de Andrés Felipe lo trataban con sumo afecto, el mismo que se le da a un hijo. Tenían el mejor concepto de él. Pese a su carácter serio e introvertido, ya en el ámbito familiar, Andrés Felipe era espontáneo y cariñoso. En su trabajo, por cierto, lo veían estricto, riguroso, metódico y siempre demasiado exigente consigo mismo. Conociendo su poco interés por el dinero, la que se encarga de llevar las cuentas del hogar, por su formación y carácter, es Catalina, la financiera de la familia, como la llaman sus padres.

El suegro de Andrés Felipe siguió siempre muy de cerca su carrera. “Si hay alguien que bien puede describir su talante profesional, sus capacidades —nos cuenta hoy— es el entonces ministro Carlos Gustavo Cano. De hecho, cuando se retiró del Ministerio de Agricultura, fue él quien le recomendó al

expresidente Uribe que nombrara a Andrés Felipe como su sucesor”.

Ni Andrés Felipe ni Catalina llegaron a imaginar la pesadilla que vivirían de pronto. Toda suerte de tergiversaciones surgieron en contra del entonces joven Ministro cuando se inició el proceso en contra suya.

Por ejemplo, ella recuerda que hallándose con su marido en el restaurante Andrés Carne de Res, se les acercó un señor Dávila junto con su novia Valerie Domínguez —a quienes no conocían y quienes estaban implicados en el escándalo— a pedirles un minuto de su tiempo. Sin que nadie se lo hubiese preguntado, el señor Dávila le dijo a Andrés Felipe que en el caso de ellos todo lo habían hecho de manera correcta y transparente. Andrés Felipe se limitó a responderle que si eso era así no deberían tener problema y que, entonces, explicaran bien al país lo que hubiere sucedido.

Pues bien, los miembros de la familia Dávila terminaron reconociendo el fraude. De hecho, aceptaron dos delitos pero, como suele suceder en Colombia, no pagaron un solo día de cárcel. Valerie Domínguez, por su parte, también acusada de tentativa de peculado y falsedad en documento público, fue finalmente absuelta por un juez del Tribunal Superior de Bogotá cuando se descubrió que, engañada por su pareja, había solicitado un subsidio de Agro Ingreso Seguro para el sistema de riego y drenaje de una finca. Lo más curioso del asunto es que cuando ella, engañada por su novio, solicitó el subsidio de AIS, Andrés Felipe ya ni siquiera trabajaba en el Ministerio de Agricultura. Aun así, los medios aseguraban que Andrés Felipe le había dado a ella un subsidio.

En cualquier caso, el mencionado encuentro fortuito en Andrés Carne de Res sería presentado luego como prueba de

una supuesta complicidad entre el exministro y uno de los acusados de haber obtenido beneficios fraudulentos del programa Agro Ingreso Seguro. Tal aseveración, absolutamente falsa, fue recogida en su momento por todos los medios de comunicación. Andrés Felipe, atónito ante aquellas inesperadas especulaciones y la distorsión de lo que en realidad había sucedido en dicho encuentro, no tuvo otra opción que esperar a que el señor Dávila fuera citado al juicio como testigo de la Fiscalía.

Por supuesto, cuando el señor Dávila compareció ante la Corte Suprema de Justicia en medio del juicio, y ya bajo la gravedad de juramento, tuvo que reconocer que su familia no conocía al exministro cuando se presentaron y accedieron al programa no le habían aportado un solo peso a su campaña, no habían recibido, directa o indirectamente, orientación o recomendación alguna de su parte para presentarse al subsidio, y que la persona que los había inducido al fraude no había sido ni el exministro ni ningún otro funcionario del Ministerio de Agricultura, sino un particular llamado Enrique Angarita. Sorprendentemente, contra esta persona, aparente determinador del fraude, ni la Fiscalía ni la Corte Suprema de Justicia han hecho absolutamente nada.

Ahora bien, a los Dávila no les quedaba otra opción que exonerar a Andrés Felipe durante su testimonio en la Corte, pues la defensa del exministro había recibido del propio abogado de Valerie Domínguez, Yesid Reyes, una cadena de correos electrónicos en donde quedaba en evidencia que todo el escándalo había sido montado con propósitos eminentemente políticos y de revancha. Dichos correos son del día 19 de octubre de 2010, a las 2:03, de la tarde y fueron admitidos

en el juicio como prueba a favor de Arias. En efecto, en una parte de los correos Juan Manuel Dávila escribe:

Valerie (sic) sin ánimo de peliar (sic) respóndeme una cosa (sic) te lo pido. (sic) Cuál es el propósito de mandarme este correo? Hubiera pensado que tu interés era informarme de la posible sanción que mantendría al ex - ministro (sic) inhabilitado a ocupar cargo públicos (sic) por muchos años, es decir, que se olvide de ser candidato para gobernador, alcalde, senado y mucho menos presidencia (sic), algo que hoy por hoy es motivo de satisfacción por lo menos para mí (si es que se da), claramente veo que este no es tu interés,...

FUE ALGO POLÍTICO NETAMENTE, SOLO POLÍTICO Y HOY ESTAMOS DEVOLVIENDO ESA PLATA ASÍ NO DEBAMOS!...

... pues el 'detonante' del escándalo que solo tuvo un propósito, JODER A ANDRES (sic) FELIPE ARIAS, pero por favor no hagamos esto con orgullo, echa (sic) la cagada por lo menos hagámoslo de la mejor forma.

Sin embargo, ni el testimonio directo de Dávila, ni estos correos, ni el cúmulo de pruebas a su favor, lograron que la Corte actuara en derecho y absolviera al exministro. Tal como lo discutió con su familia, abogados, amigos y compañeros de política cuando conoció la noticia de su condena, una intrusión muy oscura se había tenido que dar desde el propio aparato estatal para que su esperada absolución terminara convertida en injusta condena, con filtración a medios y amplificación oficial—por parte de quien lo debía proteger— dos días antes de la elección presidencial.

Y es que desde un principio él ya percibía una manipulación muy retorcida de los hechos por parte de la Fiscalía para avanzar en su contra. Por ejemplo, no se debe olvidar que los

primeros detenidos por cuenta del escándalo fueron algunos funcionarios del Ministerio. Sin sospechar que los supuestos delitos imputados a sus funcionarios lo cobijarían también a él, Andrés Felipe no lograba entender cómo aquellos ejecutivos eran objeto de tales sindicaciones. Las consideraba extravagantes, pues los detenidos eran jóvenes y brillantes profesionales que él mismo había seleccionado tomando en cuenta su alto desempeño académico y su probidad en el manejo de recursos públicos. Nunca cruzó por su cabeza que hubiesen sido sacados de sus tranquilos hogares para ser llevados a La Picota. Por eso se sintió obligado a visitarlos para reconfortarlos llevándoles comida y frazadas. No obstante, esta inocente visita sería tomada por la Fiscalía como una hábil estratagema del exministro para convenir con ellos declaraciones que le fuesen favorables. De ahí surgió algo también totalmente inesperado para él: su propia captura.

LOS DESVARÍOS DE LA FISCALÍA

Como lo escribí alguna vez, aquí es cuando uno se tropieza con una terrible falla de nuestra actual justicia: la Fiscalía acusa ciegamente sin examinar a fondo pruebas y testimonios. De su lado, la prensa suele hacerse eco de una impugnación sin verificar su validez, de manera que se convierte fatalmente en correa de transmisión de grandes infundios o de verdades a medias. Por su parte, los enemigos políticos de un acusado sacan provecho de esta situación, y la opinión pública, bajo los fogonazos periodísticos de un escándalo, termina influenciada por ellos haciendo precipitados juicios de valor. "Algo sucio debió hacer", se escuchaba decir en las reuniones sociales.

Y en efecto, tal injusta reacción de la gente del común fue la que de pronto empezaron a padecer Andrés Felipe y Catalina.

Sin haberlo previsto nunca, la imagen pública de él dio un aterrador vuelco. El brillante exministro a quien se le veía como el mejor sucesor de Álvaro Uribe —hasta el punto de tener grandes opciones para ser candidato presidencial— acabaría recibiendo un despectivo trato, propio de un delincuente.

Aunque a él no se le acusó de robarse un solo peso, se le sindicó de haber celebrado irregularmente un convenio de colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. Pero las sindicaciones de la fiscal general de la Nación de ese momento, Viviane Morales, no terminaron ahí. Para sorpresa de Andrés Felipe, la funcionaria consideró que el convenio firmado era ilícito, pues lo que debía haber hecho él era una licitación que, según ella, no la había ordenado por un sospechoso interés político.

Al pronunciar este concepto, la exfiscal no tomó en cuenta varios hechos que eliminaban semejante afirmación. El primero es que el IICA tiene una sólida reputación como brazo agrícola de la OEA. Su relación es similar a la que tiene la FAO con la ONU. El segundo, es que el IICA venía celebrando convenios de cooperación con el Estado colombiano desde hacía décadas, de modo que ningún ministro de Agricultura había sido enjuiciado por aceptar que este organismo, sin ánimo de lucro y con la mayor experiencia en materia agrícola en el continente, continuara haciéndose cargo de programas dirigidos a transferir tecnología (como lo es en cualquier lugar del mundo un sistema de riego) y, así, a aumentar la productividad del campo, las exportaciones agrícolas y el empleo rural.

Pese a estas evidencias, la exfiscal Morales argumentó que la OEA era solo un ropaje a fin de permitir que Andrés Felipe Arias decidiera realmente quiénes eran los beneficiarios de los

recursos del programa Agro Ingreso Seguro. De esta manera, lo vinculaba a las irregularidades cometidas por algunos de los beneficiarios del programa que habían realizado falsos fraccionamientos de sus fincas para presentar nuevos proyectos y obtener mayores recursos. La Fiscalía les imputó cargos a una treintena de particulares y aunque al cierre de este libro algunos habían sido condenados y otros negociaron la pena, como se indicó anteriormente el verdadero artífice del fraude nunca fue requerido por la justicia.

En contraste, el 26 de julio de 2011, la exfiscal Morales, sin prueba judicial alguna, logró que se dictara medida de aseguramiento en contra de Andrés Felipe Arias. Tal solicitud fue aceptada por un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, quien resultó ser el ahijado de bodas de uno de los más grandes enemigos del uribismo, el exmagistrado Yesid Ramírez. La razón de la enemistad obedece a que, siendo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Yesid Ramírez fue señalado por el entonces presidente Uribe de tener vínculos con personas cercanas al narcotráfico, desatándose así una brutal confrontación institucional en la cual la vindicta contra Uribe y sus funcionarios llegaría tarde o temprano. Es por ello que no sorprende que quien terminó enviando a la cárcel 'preventivamente' a Andrés Felipe Arias haya sido nadie más y nadie menos que el ahijado del gran enemigo judicial del gobierno al cual el exministro sirvió y defendió.

Como si fuese un linchamiento público, la sorpresiva medida de aseguramiento no se llevó a cabo en una sala de audiencias que sería lo usual, sino que tuvo lugar en un teatro dispuesto para el público. La multitud que llenaba el salón estaba constituida por adversarios políticos del expresidente Uribe, de ahí que aplaudieran con rabioso estrépito cuando el

magistrado ahijado anunció la decisión de mandar a Arias a la cárcel. La humillación y el dolor del exministro, su esposa, y sus padres fueron enormes.

Este fue un durísimo golpe para quien aparecía en ese momento como el líder más representativo de la corriente política de Uribe y uno de los más opcionados para ganar la elección presidencial de 2014. Nunca había imaginado Andrés Felipe que de la noche a la mañana abandonaría su tranquilo apartamento en el norte de Bogotá, donde vivía con su mujer y sus dos pequeños hijos, para ser recluido en un frío calabozo del búnker.

“Se me estaba violando la presunción de inocencia y el derecho a la legítima defensa —me contaría luego—. Quedé encerrado lejos de la familia, sin poder trabajar por mis hijos, sin entender claramente qué estaba sucediendo”.

Dos días después de estar en prisión, un grupo de hombres, haciéndose pasar por agentes de la Fiscalía, saqueó su apartamento. Para ello se valieron de todos los datos privados y personales del exministro y su familia que la exfiscal Vivian Morales reveló públicamente ante todo el país a través de los medios de comunicación: dirección, número telefónico, correo electrónico, nombres de sus hijos, etc. Algo que no solo viola uno de los derechos humanos de cualquier persona, sino que, en el caso de Andrés Felipe, era todavía más grave si se tiene en cuenta que el propio Estado colombiano lo ha catalogado como persona en situación de riesgo extraordinario.

Trasladado a la Escuela de Caballería, Andrés Felipe Arias consideró que mientras se adelantaba la investigación en su contra debía luchar por recobrar la libertad para asumir su defensa en igualdad de condiciones y sin estar debilitado. Es-

taba seguro de que para ello contaba con razones muy válidas. Necesitaba, además, disponer de espacio, tiempo y movilidad a fin de recaudar testimonios y pruebas que servirían para demostrar su inocencia. Después de que en dos audiencias previas se le hubiese negado la libertad, una tarde de domingo lo visité en su centro de reclusión. Hablando con él y con su esposa pude comprobar que no había perdido las esperanzas de obtener el derecho a preparar su defensa en libertad. Días después, la prensa y la televisión registraron con dramáticas imágenes el momento en que, por tercera vez, un juez decidía mantenerlo en prisión. Imborrable nos quedó a todos el momento en que, con lágrimas, Catalina y Andrés Felipe se fundieron en un dolorido abrazo.

¿Qué argumentos fueron ofrecidos por la justicia para darle un viso de legalidad a su encarcelamiento? Todos fueron traídos de los cabellos. La primera tesis que esgrimió la Fiscalía fue que el exministro podría aprovechar su libertad para adiestrar testigos que declararían en su favor. Incluso se llegó a alegar que si era liberado, Arias “usaría su cuenta de Twitter para influir en el proceso”.

Finalmente, pasados dos años de su ilegal arresto y ante la carencia de sólidas pruebas que permitieran prolongar su reclusión, la justicia no tuvo más remedio que dejarlo en libertad. Fue un momento del cual fui testigo. Recuerdo que lo acompañé a su apartamento y presencié la intensa emoción de Andrés Felipe cuando sus dos pequeños hijos salieron a su encuentro. Catalina, radiante de felicidad, parecía sentir que atrás quedaban aquellos dos amargos años que habían ensombrecido sus vidas. También él consideraba que, al fin libre, tenía a su alcance toda clase de pruebas y testimonios a su favor, en tanto que la Fiscalía carecía de sustento para darle

credibilidad a sus acusaciones. Andrés Felipe estaba seguro de que el juicio en la Corte Suprema de Justicia iba a culminar con su absolución.

Tanto es así que, al día siguiente de haber recobrado su libertad, su esposa recibió una llamada en la que le indicaban que el Presidente de la República quería hablar con Andrés Felipe. Ella, sorprendida, le pasó el teléfono. Andrés Felipe cuenta que Juan Manuel Santos lo felicitó y le dijo que él y su familia habían rezado mucho por ese momento. Con seriedad, el exministro le agradeció y se despidió. Intuía, cuenta él, que esas palabras no eran sinceras. El oscuro vuelco que le dieron al veredicto que debía absolverlo y la forma como la Corte Suprema filtró dicho fallo a la prensa, justo dos días antes de una elección presidencial en la que Juan Manuel Santos parecía perder, le confirmaron —relata él desde el exilio— su intuición.

Sin embargo, antes de que ocurriera semejante vuelco, varios pronunciamientos en su favor le permitieron mantener la tranquila certidumbre de su absolución. En febrero de 2014, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia que Arias fuera declarado inocente. Sostuvo también que “la Fiscalía había desbordado los límites de la acusación” sin siquiera tener pruebas de los supuestos delitos. Tres meses después, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca estableció la legalidad de los convenios de cooperación suscritos por el Ministro Arias con el IICA. Finalmente, en la segunda semana de junio de 2014, la Procuraduría, luego de una investigación que duró dos años en torno a las finanzas personales de él y de su esposa, determinó que no hubo nunca desviación de recursos oficiales en su beneficio.

UNA PERSECUCIÓN POLÍTICO-JUDICIAL

Además de las ilegalidades cometidas con su encarcelamiento, el juicio de fondo en contra de Andrés Felipe Arias estuvo también plagado de irregularidades que lo despojaron de los más elementales derechos y garantías propios de un proceso penal.

Hay razones para creer que la entonces fiscal general Viviane Morales estuvo movida por un oculto interés de revancha en contra del exministro Arias y su abogado Jorge Aníbal Gómez. En efecto, este último, cuando era magistrado de la Corte Suprema de Justicia, jugó un decisivo papel en el proceso y condena de Carlos Alonso Lucio, esposo de la exfiscal.

De su lado, la magistrada que dirigió el juicio, María del Rosario González, nunca ocultó que se consideraba víctima del gobierno de Álvaro Uribe, al que estuvo estrechamente vinculado el exministro Arias. A pesar de ello siguió hasta el final del proceso juzgándolo, sin tomar en cuenta que las pruebas aportadas contra él estaban basadas en apreciaciones sesgadas, descontextualizadas, incompletas y ajenas a un real acervo probatorio. Mejor dicho, la supuesta víctima juzgando a quien sirvió y defendió al supuesto victimario.

Adicionalmente, el fallo contra el exministro viola el más elemental de los derechos humanos como lo es el derecho a la presunción de inocencia. En efecto, el escrito reconoce que a la Fiscalía no se le podía exigir que probara el supuesto plan común del exministro con los demás imputados y condenados. Así nadie se salva de una condena.

Como si lo anterior fuera poco, uno de los mismos magistrados de la Corte disintió del fallo y reconoció que a Andrés Felipe Arias le habían violado el debido proceso, pues

la Fiscalía lo acusó por unas circunstancias, pero la Corte lo condenó por otras muy diferentes. Más aún, una de las magistradas que firmó la condena ni siquiera asistió a una sola de las audiencias, pues se posesionó dos meses después de terminado el juicio. Por ende, sin conocer el caso y las pruebas, lo condenó.

Pero, además, al exministro le violaron el derecho a la igualdad ante las Cortes. Es decir, a ser tratado en la misma forma como una corte o un juez trataría a cualquier otro ciudadano. Por ejemplo, no solo lo condenaron por unos convenios idénticos a los que firmaron todos los ministros que lo antecedieron, sino que el monto de la condena, ya de por sí injusta e ilegal, fue establecido de la forma más severa posible y desproporcional: más de 17 años de cárcel y una multa equivalente a dieciséis millones de dólares.

En retrospectiva se entiende por qué la Fiscalía tuvo que ocultar pruebas favorables a Arias como el documento del Cuerpo Técnico de Investigaciones que lo exoneraba de haber cometido cualquier conducta penal en torno al escándalo de AIS. Por cierto, cuando esta prueba fue registrada por un conocido medio de comunicación, la Corte la excluyó del proceso.

Adicionalmente, en las normas colombianas una persona como el exministro carece de otro derecho humano universal y fundamental reconocido: el derecho a que la condena sea revisada por un tribunal superior e imparcial.

EL INEVITABLE EXILIO

Es fácil imaginar la angustia que se apoderó de Catalina, la esposa de Andrés Felipe, cuando aquella mañana del 13 de junio de 2014 escuchó en la radio el rumor de que iba a

producirse un fallo condenatorio en contra de su esposo. Sin certeza alguna de que aquello fuera cierto, esperó la opinión de sus padres.

Cuando su madre le acercó a su regazo, sintió que también ella tenía el palpito de una nueva y terrible realidad. Andrés Felipe, en cambio, se mantenía retraído y sombrío. No podía dar crédito a los rumores radiales que habían estremecido a su esposa. Cuando menos lo esperaba, su suegro los dio por ciertos. Alguien que estaba presente, mirándolo fijamente y sin sombra alguna de duda, le dijo con voz grave: "¡Tú te tienes que ir, aquí no hay justicia!".

Dos amigos cercanos llamaron a los padres de Andrés Felipe, que viven en Medellín, y les pidieron, sin dar mayor detalle de lo que estaba ocurriendo, que volaran de inmediato a Bogotá.

Solo en Antioquia se conoce la excepcional tarea que cumplieron, durante mucho tiempo en favor de los desamparados, Rodrigo Arias Urrea y su esposa, Sonia Leiva. Prominente médico, cuando descubrió la penosa situación en la que se encontraban muchos heridos y enfermos en Sonsón, su pueblo, decidió organizar un grupo de profesionales (cirujanos, anesthesiólogos, oftalmólogos, ginecólogos, cirujanos plásticos y enfermeras profesionales) para adelantar un programa asistencial nunca visto. Más de 2.500 cirugías realizadas de manera gratuita fueron la base de esta labor que se adelantó durante 18 incansables años sin ningún interés económico. No es extraño que tal perfil de servicio y desprendimiento en torno a una tarea social fuera también un factor determinante en la vida y carrera de Andrés Felipe Arias.

Tomada la decisión de no prestarse a semejante injusticia, Catalina y Andrés Felipe se dirigieron a su casa para preparar a

toda prisa una pequeña maleta. Andrés Felipe grabó un vídeo que una amiga suya todavía guarda bajo custodia esperando el momento de darlo a conocer. Ya con el tiempo contado y en medio de profunda tristeza y agonía, abrazó como si fuera la última vez a Catalina, Eloísa y Juan Pedro. El pequeño no entendía lo que sucedía, pero Eloísa se desató en llanto. Andrés y Catalina sintieron el dolor más grande de su vida en ese momento, pero ella, como siempre, le dio fuerza para emprender el viaje.

Hasta el automóvil en que se encontraba Andrés Felipe llegaron de pronto sus padres quienes acababan de desembarcar del avión que los traía de Medellín. Fue esa una breve y muy triste despedida. Cuando llegó el momento, algunas personas que creen en su causa lo ayudaron con todo el proceso de salida. Sintió como nunca la congoja de una partida que quebraba su vida. Tendría que enfrentar solo, por ahora, un incierto destino.

Una vez que quedó claro para ella que no tenía otro camino que el exilio, Catalina, apoyada por su madre, empezó a preparar todo lo necesario para viajar con sus dos pequeños y reunirse con Andrés Felipe. Debió renunciar a su empleo, y con la ayuda de sus amigas de infancia puso a la venta muebles, vajillas y otros enseres con el afán de recoger algún dinero. Nunca había resultado más injusta la infame acusación hecha a Andrés Felipe de apropiarse de dineros públicos, cuando él y su familia, sin mayor soporte económico, debían encarar ahora las más básicas necesidades de sobrevivencia.

No fue nada fácil el viaje de Catalina y sus hijos. Surgió de repente un inesperado contratiempo. Era indispensable contar con la autorización de Andrés Felipe para que sus dos hijos menores de edad pudiesen salir del país. De modo

que para tramitar dicho permiso, el lunes 16 de junio él tuvo que acudir a un consulado colombiano. Allí lo maltrataron, humillaron y retuvieron casi dos horas hasta que los funcionarios consulares, a regañadientes, pero todavía celebrando el triunfo de Juan Manuel Santos, le tuvieron que tramitar el permiso y devolver su pasaporte, pues en ese momento lo de su condena seguía siendo un rumor ilegalmente filtrado por la propia Corte Suprema de Justicia para influir en la elección presidencial.

A los pocos días, pero ya en el exilio, el rumor se convirtió en realidad y se conoció la sentencia de la Corte Suprema condenándolo a 17 años y cinco meses de prisión y a pagar una multa equivalente a dieciséis millones de dólares. De esta manera, quien fuera considerado como un eficiente funcionario y una reveladora opción política del país, quedó convertido en un prófugo de la justicia.

Ignorando que este fallo es una prueba más de los desvaríos judiciales que tienen hoy como sustento falsos testigos, imputaciones sin fundamento y amañadas condenas, el ciudadano común está muy lejos de conocer la verdad sobre este caso. Mantiene dudas y sospechas. No ve que el exilio de Andrés Felipe y otros personajes, lejos de ser una prueba de culpabilidad es la triste consecuencia de una clara persecución política. Algún día y de alguna manera habrá que reparar la iniquidad que se ha cometido con él.

PLINIO APULEYO MENDOZA

CARCEL O EXILIO

Del horror que recogen estas páginas he sido testigo. Militares que arriesgaron sus vidas luchando contra el terrorismo han sido condenados a prisión. Hombres y mujeres sin mancha alguna, que gracias a sus talentos, a sus capacidades profesionales y a su vocación de servicio llegaron a ocupar importantes cargos públicos, se encontraron enredados en tortuosos procesos judiciales. Algunos de ellos, advirtiendo el propósito de ser condenados injustamente, han tomado junto con sus familias el triste camino del exilio. Otros, que confiaron en demostrar su inocencia, se encontraron de pronto privados de su libertad.

La verdad es que la justicia en Colombia, durante los últimos años, se ha convertido en un instrumento político.

Algo realmente escandaloso. La justicia colombiana hoy en día da valor a un testimonio sin importar quién lo presenta, sin investigar previamente quién es el testigo y, lo que es más grave, sin corroborar la veracidad de lo dicho por él.

0788

DOCUMENTOS



Planeta

ISBN-13: 978-959-42-5163-3

ISBN-10: 959-42-5163-5



9 789594 251633

Bogotá, September 2016

Your Honor

JUDGE JOHN O'SULLIVAN

U.S Magistrate Judge, Southern District of Florida

United States of America

Your Honor:

I am writing to you as a journalist and author of the book "Prison or Exile", in which I dealt with the case of former Agriculture Minister and presidential candidate Andres Felipe Arias.

After an objective and thorough investigation I can assure you, as I said in my book, Andres Felipe Arias has been the victim of an unfair trial with dark political interests. He was accused of having favored agricultural entrepreneurs with economic subsidies when in fact they depended on affiliate of the Organization of American States, OAS, which provided technical advice and assistance on irrigation projects. Former ministers of Agriculture confirmed that this task came directly from OAS technicians.

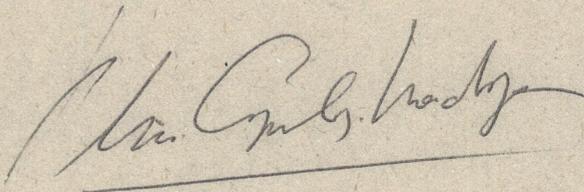
Throughout the trial against Arias, there was no evidence demonstrating fraud, bribery and illicit enrichment in favor. What became evident was a monstrous judicial frame to prevent the young politician, who was the candidate with more options to succeed Álvaro Uribe in the presidency of the Republic of Colombia.

In my book, I show that not only in the case of Andres Felipe Arias but in other emblematic figures with a clean record, belonging to the circle of former President Uribe, had to take the path of exile for not having the necessary judicial guarantees that allow them to prove their innocence. Some of them have requested asylum justifying their status as political refugees.

The administration of justice in Colombia today is going through one of its worst crises on account of corruption and politicization, which has polluted a large number of judicial decisions.

I hope that these reasons are taken into account by your Honor when resolving the situation of Andres Felipe Arias.

With a respectful greeting, I subscribe sincerely,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Plinio Apuleyo Mendoza", written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

Plinio Apuleyo Mendoza

CARCEL O EXCILIO

Plinio Apuleyo Mendoza

Free Translation.

Andrés Felipe Arias

Never anticipated a conviction. After presenting his case, Andrés Felipe Arias was sure that the decision of the Supreme Court of Justice would be in his favour. The evidence of his defense had demolished the case theory of the attorney general during the trial. Additionally, Andrés Felipe and his lawyer had been able to show several tampered and manipulated evidence by the attorney general. So much so, that a journalist covering the trial informed Andrés Felipe that they had truthful information, coming from the own judges, that the attorney general's work was so precarious therefore he should be absolved.

The only thing that was unexplainable was the continuous postponing of the final hearing. In fact, the verdict should have been given by the court hours or days after the trial was over. This is how it is established in the Penal Code, so the courts decisions are not exposed to external pressures. And it is so, that when the trial against Andrés Felipe was over, the feeling of all the present, including the long faces of the attorney general, was of an imminent absolution. One of the auxiliary judges confessed to the defense that there was no way that Andrés Felipe could be convicted. But the verdict was postponed the first time because the Congress elections were closing by. Then it was suspended for a second time when the presidential elections first round was very close, in which Óscar Iván Zuluaga resulted as winner.

Maybe – Andrés Felipe naively thought – that the postponement of the final hearing by the court was because they were avoiding announcing an absolution within such a polarized presidential campaign. But it was not that way, the ex-minister was about to receive the hardest hit of his life, when the country was on the verge of a second round of the presidential election and every option seemed to assure Óscar Iván Zuluaga's triumph, who was the first round resounding winner. In fact, the morning of June 13th 2014, 48 hours before the decisive presidential election the Supreme Court of Justice illegally leaked to a journalist who was very close to the attorney general, the rumor – which was spread to all the media - that there would be a conviction against him.

When Andrés Felipe realized that the director of the National Protection Unit, the same person in charge of his and his family security due to the extraordinary risk they faced in Colombia, was spreading and amplifying the false news of his conviction in social media, the ex-minister, his family, his lawyers, his friends and his political partners, did not have the slightest doubt that something very dirty, induced by the government, had happened between the last hearing, were his absolution was imminent and the disturbed electoral moment.

We cannot forget that at that moment the Government and the judicial branch had untied the most ferocious hunt against the Democratic Center (Centro Democrático) and who was most likely to be president of Colombia: Óscar Iván Zuluaga.

Catalina, Andrés Felipe's wife, did not take this lightly. Tall, beautiful, skinny with such liveliness, had to share with her husband two opposite faces of destiny. The first face was Happy and the second one Tragic.

Happy, because when they met, they both had a promising future in their corresponding professional fields. She had the proper glow of a young executive that had been recognized in the financial world. Andrés Felipe was the young Agriculture minister recently designated by Uribe who was the president at the time, and who had many similarities with him and the public opinion saw him as his heir.

Andrés Felipe and Catalina, as I have written before, felt a strong attraction towards one another. It was love at first sight. They got married in an ancestral church in Sopó only nine months after they had met.

The unexpected and eerie face that all of a sudden their fate took appeared with the misnamed Agro Ingreso Seguro spread by the media and praised by ex president Uribe's opponents. Catalina had left her successful career in order to take care of her family. Eloisa, their daughter, was only two years old and the little Juan Pedro was only twenty days old when Andrés Felipe was detained and taken to the terrifying bunker in the Attorney General's office, where the most dangerous delinquents were taken.

"I know that someday, I don't know when that day will come, the attorney general or any body else will not find any felony in my husbands actions – she wrote at the time – Nobody can imagine what we have had to put up with, how difficult this experience has been. I do not wish this to any one, not even those that have hurt us so much".

As it is said before, since the scandal arose she lived in the shadow of this disaster. When Andrés Felipe, after spending two years in jail, was released while waiting for his trial, she finally saw a possible fair absolution. Hence listening to all those media rumors that fateful June 13th, she had the feeling that all her hopes were destroyed. Without hesitation she picked up the phone and called her mother. She did not let her know her distress. She limited herself to announce that they would be at her house at noon. Just at that moment, when they saw each other in the lobby, the anguish that they had both kept from each other, was now visible. They hugged and they started to cry.

AN UNEXPECTED NIGHTMARE

Andrés Felipe's in-laws treated him with affection as if they would a son. They had the best concept of him. Although he was serious and introverted, with his family he was spontaneous and affectionate. In his work life, he was seen as strict, rigorous, methodical and always very demanding with his own self. Knowing his little interest for money, the one who keeps the books in their home, because of her character and upbringing, is Catalina, the financial one in the family, how she is called by her parents.

Andrés Felipe's father in law always followed his career very closely. If there is someone that can describe his professionalism, his capacities – he tells today – is the former Agriculture Minister Carlos Gustavo Cano. In fact, when he left the ministry, he was the one that recommended to ex – president Uribe to appoint Andrés Felipe as his successor. ”

Andrés Felipe and Catalina never imagined the nightmare that they were about to live.

All kinds of misrepresentations came up against the once young minister when the trial began against him.

For example, she remembers that she was with her husband in Andrés Carne de Res, when Mr. Dávila with his girlfriend Valerie Dominguez – who they did not know and who were involved in the scandal - came to them, to ask for a moment of their time. Without anyone asking, Mr. Dávila told Andrés Felipe that in his case everything had been done correctly and transparently. Andrés Felipe limited himself to say that if that was correct, they should not have a problem and that they should explain to the country what happened.

Well, at the end the members of the Dávila family recognized the fraud. In fact, they accepted two felonies and as it usually happens in Colombia, did not pay one single day of jail. Valerie Dominguez, charged for attempt of embezzlement and forgery in public documents, she was finally absolved by a Judge of the Superior Justice Tribunal of Bogotá, when they discovered that she was deceived by her boyfriend, she had requested a subvention from Agro Ingreso Seguro for the drainage and irrigation system of a farm. What is very curious is that when she, deceived by her boyfriend, requested the subvention from AIS, Andrés Felipe was no longer Agriculture Minister. Even so, the media claimed that Andrés Felipe had given her the subvention.

In any case, the mentioned chance encounter in Andrés Carne de Res, would be later presented as evidence of an alleged complicity between an ex-minister and one of the accused of receiving fraudulent benefits from the Agro Ingreso Seguro program. The media picked up this completely false assertion. Andrés Felipe, stunned by the unexpected speculation and the distortion of what really happened in said encounter, had no other option but to wait until Mr. Dávila was summoned to the trial as a witness of the attorney general.

Of course, when Mr. Dávila appeared before the Supreme Court of Justice in the trial and under oath, he had to acknowledge that his family did not know the ex-minister when they presented and accessed the program, that they had not contributed one single penny to his campaign, that they had not received directly or indirectly any kind of orientation or recommendation in order to obtain the subvention and that the person that had induced them to the fraud was not the ex-minister nor any other employee of the Agriculture Ministry, but an individual called Enrique Angarita. Surprisingly nothing has been done by the attorney general or the Supreme Court of Justice against this person that is the apparent fraud perpetrator.

However, the Dávila family had no other option but to exonerate Andrés Felipe during their testimony in court, because the ex-ministers lawyers had received from Valerie Dominguez's lawyer, Yesid Reyes, a chain of e-mails in which it was obvious that all the scandal was setup with a eminently political and revenge purpose. These e-mails are dated October 19th 2010 at 2:03 in the afternoon and they were admitted as favorable proof towards Andrés Felipe in the trial. In fact, in one of the e-mails Juan Manuel Dávila writes:

Valerie (sic) without the intention of fighting (sic) answer me one thing (sic) I beg you. (sic) What is the purpose of sending this e-mail? I would have

thought that your interest was to inform me of the possible sanction that would maintain the ex-minister (sic) unable to hold any public office (sic) for many years, that is to say, that he can forget about being a governor, mayor, congressman candidate and to say the least president (sic), something that today is reason of satisfaction at least for me (if it does come through), I can clearly see that this is not your interest...

IT WAS SOMETHING POLITICAL, ONLY POLITICAL AND TODAY WE ARE GIVING BACK THAT MONEY ALTHOUGH WE SHOULDN'T!...

... Well the "trigger" of the scandal had one purpose, SCREW ANDRES (sic) FELIPE ARIAS, but please, lets not due this with pride (sic) if the damage is done (sic) at least lets do it the best way.

However, not Dávila's testimony nor these e-mails or the series of proof in his favor managed to make the Court act lawfully and absolve the ex-minister. As he discussed with his family, lawyers, friends and political colleagues when he heard the news about the verdict he knew that there was a very dark intervention from the government, in order for his absolution to become an unjust conviction, which was leaked to the media – by who was in charge of protecting him – two days before the presidential election.

From the start he felt a twisted manipulation from the attorney general against him. For example, we cannot forget that the first ones detained in respect to the scandal were ministry officials. Without any suspicion that the alleged felonies against the officials would affect him as well, Andrés Felipe did not understand how those officials were suspects. He considered it extravagant, since the detained officials were young and brilliant professionals that he had chosen because of their academic achievement and their integrity in handling public funds. It never crossed his mind that they were removed from their homes and taken to La Picota. This is why he felt obliged to visit them and take food and blankets to comfort them. Notwithstanding, this innocent visit was taken by the attorney general as a clever ploy of the ex-minister to agree on statements that would be favorable to him. Something totally unexpected arose from there: his arrest.

THE ATTORNEY GENERAL'S RAVINGS

As I wrote sometime ago, this is where we stumble upon a terrible flaw of our current justice: the attorney general blindly accuses without examining proof or testimonies. From their side, the media usually reports on charges without verifying its veracity, which becomes a chain belt of false rumors and half-truths. Meanwhile, the political enemies take advantage of the situation and the public opinion, under the influence of

the media, end up making ill-founded judgments. “He must have done something dirty”, you would over hear in social gatherings.

And indeed, Andrés Felipe and Catalina start to suffer that unfair reaction of the people. Without ever expecting, his public image had a terrible turn. The brilliant ex-minister who everybody saw as the best successor of Alvaro Uribe – to the point of having great options of being a presidential candidate – turned out receiving pejorative treatment, as a delinquent.

Although he was not charged of stealing any money, he was accused of signing an agreement with Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. The accusations of the attorney general of the moment Viviane Morales did not stop there. For Andrés Felipe’s surprise she considered this agreement to be illegal, because she thought that he should have done a public bid, and that he had not done it, because of a suspicious political interest.

When the ex-attorney general enounced her concept, she never took into account several actions that would eliminate such statement. The first one is that IICA has a solid reputation as being the Agriculture limb of the OAS. Its relationship is similar to the one between FAO and the UN. The second one, is that the IICA had been signing cooperation agreements with Colombia for decades, for which non of the former Agriculture ministers had been trialed for accepting this non – profit organism with vast experience in agriculture matters in the continent, to continue in charge of these programs to manage technology (as it is in any other place in the world an irrigation system) in order to increase the countryside productivity, agriculture exports and rural employment.

Despite the evidence, the ex-attorney general argued that at the moment the OAS was just a front to allow Andrés Felipe Arias to decide who would really become the beneficiaries of the Agro Ingreso Seguro Program. This way, they could link him with the irregularities that had been committed by those who were benefited by the program, when they fractioned their farms in order to present more projects and obtained more resources. The attorney general accused more than 30 common people, at the moment this book was printed only some had been convicted, others had negotiated their sentence, but as we said before the real author of the fraud was never called to justice.

In contrast, July 26th 2011, the ex-attorney general Morales, without judicial proof, was able to obtain a detainment order against Andrés Felipe Arias. Accepted by a judge of the Superior Justice tribunal of Bogota, who turned out to be the godson of one of the biggest enemies of Uribe, the

ex-judge Yesid Ramirez. The main reason of this enmity is because while Yesid Ramirez was judge of the Supreme Court of Justice, President Uribe accused him of having links with people known as Narcos, this brought up a brutal institutional confrontation, for which the vengeance against Uribe and his followers would come sooner than later. This is why it is no surprise that, who put Andrés Felipe Arias under preventive arrest, would be the godson of the worst judicial enemy to the government to which the ex-minister served and defended.

As if it was a mob law, the surprise measure was not given in a courtroom but in a theater for the public to see. The multitude that filled the theater were the political adversaries of ex – president Uribe, who applauded with madness when the judge (Godson) announced the decision of sending Arias to jail. The humiliation and the pain of the ex – minister, his wife and his parents were huge.

This was a very hard hit for who at the moment seemed like the most representative leader of Uribe's political policy and one of the most optioned to win the 2014 presidential election. Andrés Felipe never imagined that from one day to an other he would have to leave his apartment in the north of Bogota, where he lived with his wife and his little kids, to be detained in a cold dungeon in the Bunker.

“My presumption of innocence and my right to self defense was violated – he would tell me later -. I was locked up, far away from my family, without being able to work for my kids, without really understanding what was happening”.

Two days after he was in prison, a group of people who said they were agents of the Attorney General office, looted his apartment. In order to do this they used all the ex-minster and his family's private and personal data, which the ex-general attorney Vivian Morales revealed publically to the country through the media: address, telephone number, e-mail, name of his children, etc. This not only violates a human right, but in Andrés Felipe's case it was very serious, taking into account that the Colombian state had catalogued him as a person of extraordinary risk.

When Andres Felipe Arias was transferred to the Calvary School he considered that while the investigation was on course he had to fight to recover his liberty in order to assume his defense in equal conditions and not weakened. He was sure that he had enough reasons. He also needed time and mobility in order to collect testimonies and proof to demonstrate his innocence. After two hearings in which his plead to be released were denied, one Sunday afternoon I visited him. Talking to him and his wife I

could say that he had not lost his faith in being able to prepare his defense as a free man. Some days later, the written and televised media showed the dramatic images in which for the third time, the judge decided to keep him in prison. It is unforgettable to all, the moment in which with tears Catalina and Andrés Felipe melted down in a hurtful hug.

What arguments were offered by the justice system to give his detainment a legal aspect? They were all crazy. The first thesis said that the ex-minister would take advantage of his liberty to train witnesses to declare in his favour. It was even said that if he were free, Arias “would use his Twitter account to influence the trial”.

Finally after two years of having him locked up illegally, the justice system had no other choice but to let him out. I remember that I accompanied him to his apartment and I witnessed the emotion of Andrés Felipe when his two little children came out to receive him. Catalina was glowing with happiness, it seemed as if those two sour years had been left behind. He also considered that finally free, he could have all the proof and testimonies at reach, while the attorney general lacked foundation to make its accusations credible. Andrés Felipe was sure that his trial in the Supreme Court of Justice would culminate with an absolution.

So much is so, that the next day of freedom, his wife received a call in which they indicated that the president of Colombia wanted to talk to Andrés Felipe. As surprised as she was, she passed the phone. Andrés Felipe tells us that Juan Manuel Santos congratulated him and told him that his family and himself had all prayed very much for this moment to come. Sternly the ex-minister thanked him and said goodbye. He had the intuition that those were not sincere words. The dark twist that was given to his verdict that should have absolved him and the way the Supreme Court leaked the sentence to the media just two days before a presidential election in which Juan Manuel Santos looked like he was losing, confirmed – as he tells us from exiled – his intuition.

Although, before the twisted sentence, various judgments were in his favour and that permitted him to maintain a calm, certainty of his absolution. In February 2014 Colombia's Inspector general requested the Supreme Court of Justice to declare Arias as innocent. He also said that “the attorney general had exceeded his prosecution limits” without even having proof for those so – called felonies. Three months later the administrative tribunal of Cundinamarca ruled that the cooperation agreements with IICA were legal. Finally, in the second week of June 2014 the Inspector General, after two years of investigating his personal

finances and of his wife, determined that there was never a deviation of public resources in his benefit.

A JUDICIAL/POLITICAL PERSECUTION

In addition with the irregularities of his imprisonment, the trial against Andrés Felipe Arias was riddled with irregularities that stripped him from the most essential rights and warranties in a criminal trial.

There are reasons to believe that the ex-attorney general Vivian Morales had hidden motives of revenge against ex-minister Arias and his lawyer Jorge Aníbal Gómez, who in effect was a judge of the Supreme Court of Justice and played a decisive part in the trial and judgment of Carlos Alonso Lucio, husband of the ex-attorney general.

The judge who was leading the trial, Maria del Rosario González, never hid that she considered herself a victim of the Álvaro Uribe's government, to which ex-minister Arias was linked. Notwithstanding the above, she maintained herself in the whole trial, without taking into account that the evidence provided against him were biased, not in context, incomplete assessments and not part of the body evidence. Better said, the alleged victim, judging who served and defended the alleged victimizer.

Additionally, the ruling against the ex-minister violated the most elemental of the human rights, the presumption of innocence. In fact, in the document it is acknowledged that the attorney general did not have to prove the alleged plan of the ex-minister with the other accused and convicted. There is no way any one could get off a conviction.

As if any of this was not enough, one of the judges of the Court disagreed with the final verdict and recognized that there was a violation of due process in Andrés Felipe Arias's trial, because the attorney general accused him for some circumstances and the Court convicted him for different ones. Even more, one of the judges that sign the conviction did not even assist the hearings because she was not yet in office, she was named judge of the court two months after the trial was over. Therefore, without knowing the case and the evidence, she convicted him.

The ex-minister's right to the equality of courts was also violated. That is to say, to be treated like a court or a judge would treat any other citizen. For example, they did not only convict him for signing agreements that were identical to those signed by ministers before him, but also the amount of the conviction that was already unfair and illegal, was established in the

most severe and disproportionate way: more than 17 years of jail and a fine of sixteen million dollars.

In retrospect you can understand why the attorney general had to hide favorable evidence to Arias, like the document of the CTI (investigating Agency) in which they exonerate him from any criminal conduct in the AIS scandal. When the media released this evidence, the court excluded it from the trial.

Additionally, in Colombian law people like the ex-minister lack another human and fundamental right: that a superior and impartial tribunal could review his conviction.

THE INEVITABLE EXILE

It is easy to imagine the anguish that overcame Catalina, Andrés Felipe's wife, when that morning of June 13th 2014 she heard on the radio the rumor that a conviction against her husband would happen. Without any certainty if that was true, she waited for her parents' opinion.

When her mother brought her to her lap, she felt that she also had the feeling that a new and terrible reality was here. Andrés Felipe, on the other hand, was withdrawn and gloomy. He could not give credit to the rumors on the radio that had shaken his wife. When they less expected it, his father in law confirmed them. Someone that was present at the time looked at him and without doubt told him in a deep voice: "You have to leave, there is no justice here."

Two very close friends of Andrés Felipe, called his parents who live in Medellin and they asked them, without giving them too much explanation of what was going on, that they should fly to Bogota immediately.

Only within Antioquia do they know the exceptional service rendered to the less fortunate for years by Rodrigo Arias Urrea and his wife Sonia Leiva. He was a well-known doctor, that when he discovered the unfortunate situation in which wounded and sick people of Sonsón, his hometown, were in, he organized a group of medical professionals (surgeons, anesthesiologists, ophthalmologist, Gynecologists, plastic surgeons and nurses) to go forward with a program of medical assistance, never seen before. More than 2.500 surgeries were done free of charge during 18 years without any economic interest. It is not strange that this service and generous profile was decisive in Andrés Felipe's life and career.

With the decision of not presenting themselves to this injustice, Catalina and Andrés Felipe went home and made in a short time a small suitcase. Andrés Felipe recorded a video that a good friend of his has in her custody waiting for the day to come to release it. With very little time and with sadness and agony, he hugged Catalina, Eloisa and Juan Pedro as if it was the last time. The little one did not understand what was happening, but Eloisa cried. Andrés and Catalina felt the worst pain in their life, but as always, she gave him the strength to take that trip.

Andrés Felipe's parents went to the car he was in, just as they landed. This was a very brief and sad goodbye. When the moment came, people that believed in his cause helped him with the process to leave the country. He felt the sorrow of a departure that was breaking his life. He would have to face alone, for now, an uncertain destiny.

Once she realized that there was no other way than exile, Catalina, supported by her mother, started to prepare everything necessary to travel with her little ones to be reunited with Andres Felipe. She had to quit her job and with the help of her childhood friends put her dinnerware and other things on sale in order to obtain some money. It had never seemed so unfair the accusation that Andrés Felipe had kept public resources, when his family and himself were struggling without economic support, having to face the most basic survival necessities.

The trip was not easy for Catalina and her children. There was an unexpected setback. It was essential to have Andrés Felipe's authorization in order to leave the country with her kids. So he had to go to the Colombian Consulate on June 16th in order to process the authorization. He was mistreated, humiliated and retained almost two hours until the consulate officers reluctantly, although still celebrating Juan Manuel Santo's victory, processed the authorization and gave him back his passport, because up to that moment his conviction was still an illegal rumor leaked by the Supreme Court of Justice to influence in the presidential election.

A few days later, already in exile, the rumor became a reality and the sentence of the Supreme Court of Justice was a conviction of 17 years and 5 months of prison and to pay a fine equivalent to sixteen million dollars. This is how, who was considered an efficient civil servant and a political option for the country, was transformed into a fugitive.

The ordinary citizen ignores that this conviction is more proof of the judicial ravings that have false witnesses, charges without grounds and rigged convictions, they will never know the truth about this case. It has doubts

and suspicions. Can't you see that Andrés Felipe's exile and of other people, far from being a proof of guilt is the sad consequence of a political persecution. Some day and somehow the inequality that has been committed against him must be repaired.

